

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADO PONENTE
MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Medellín D. E. de C., T. e I.¹, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés

Radicación n°	05001-31-03-003-2015-00678-02.
Proceso.	Verbal.
Demandantes.	Carlos Arturo Duque Higueta y otros.
Demandados.	Mototransportar S.A.S.
Procedencia.	Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Medellín.
Decisión.	Confirma la sentencia apelada.
Síntesis.	En principio, el responsable de los daños causados en medio del ejercicio de una actividad peligrosa es el guardián de dicha acción, que se puede presumir en el dueño e incluso se puede extender a la empresa afiliadora, pero ambos conservan la posibilidad de acreditar otra realidad.
Rdo. Interno	049-17
Sentencia n°	010-23
Aprobación	Proyecto aprobado en sesión virtual del 24 de marzo de 2023.

I. ASUNTO A RESOLVER.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, procede la Sala a resolver la apelación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia de 22 de junio de 2017, dictada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, dentro del proceso verbal de Santiago Duque Velásquez, Carlos Arturo Duque Higueta, Lilian María Velásquez Rodríguez y Alejandro Duque Velásquez frente a la sociedad Mototransportar S.A.S., y en donde fueron llamados en garantía Oscar Antonio Mejía Ortiz (qepd) y La Previsora S.A., compañía de Seguros.

¹ Acto Legislativo 01 de 2021, art. 1º. *"La ciudad de Medellín se organiza como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación."*

II. ANTECEDENTES.

1.- LA DEMANDA.

1.1.- Lo pretendido. Mediante escrito presentado el 28 de mayo de 2015, los señalados convocantes presentaron demanda constitutiva de proceso verbal en contra de Mototransportar S.A.S., para que se le declarara civil y extracontractualmente responsable de los perjuicios demandados, causados en el accidente de 3 de diciembre de 2012, en el que estuvo involucrado el vehículo de placas TRB 279, afiliado a Mototransportar S.A.S.

Como consecuencia de lo anterior, pidieron que se le condenara a pagar, a favor de Santiago Duque Velásquez, las suma de \$25.835.069 por lucro cesante consolidado, \$173.417.368 por lucro cesante futuro y el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de daño moral y otra cantidad igual por daño a la vida de relación.

Del mismo modo, con relación a los señores Carlos Arturo Duque Higuita, Lilian María Velásquez Rodríguez y Alejandro Duque Velásquez, reclamaron 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes por daño moral e igualmente por daño a la vida de relación.

Además, requirieron la indexación de la condena y se impusieran las costas del proceso a la encausada.

1.2.- Los hechos. En sustento de lo pedido, señalaron que el 3 de diciembre de 2012, el señor Santiago Duque Velásquez se transportaba como conductor de la motocicleta de placas DOM 12C, por la carrera 50 entre calles 29 y 30 de Medellín, cuando fue “*aparatosamente atropellado*” por el vehículo de placas TRB 279.

Sobre las circunstancias del suceso, contaron que el rodante conducido por el señor César Augusto Yepes Sierra, lo arrolló después de emprender una maniobra de adelantamiento en la autopista, y dijeron que la Secretaría de movilidad había sancionado a quien conducía el camión, mientras a Santiago Duque Velásquez lo había exonerado.

Con referencia a los daños cuya indemnización pretenden, apuntaron que Santiago trabajaba como mensajero, recibiendo un salario de \$1.121.682, lo que no pudo volver a recibir, dado que, como secuela del accidente, sus piernas fueron amputadas y su capacidad laboral se afectó en el 67,15%.

De otro lado, esgrimieron que las lesiones físicas padecidas por Santiago le han generado daños de estirpe moral y a las condiciones de existencia, lo que en manera similar ocurre con sus parientes.

Finalmente, adujeron que intentaron conciliar el resarcimiento rogado, pero sin resultados positivos (fls. 1 a 11, cuaderno principal, expediente físico).

2.- LA RÉPLICA.

Mototransportar S.A.S. aceptó la ocurrencia del accidente, pero negó que el señor Santiago Duque Velásquez hubiera sido atropellado; pues, la realidad es que la moto fue desestabilizada por otra, que la arrojó hacia el camión, todo lo cual se fincó en declaraciones de terceros.

Estimó que la decisión contravencional no es vinculante, y después de aducir que el actor Duque Velásquez se encuentra pensionado por invalidez, manifestó que se atenía a la prueba de los perjuicios demandados.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y, con el fin de enervarlas, planteó las defensas que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva, basado en que el utilitario de placas TRB 279 no estaba afiliado a Mototransportar S.A.S., en el día de los hechos. Además, alegó excesiva cuantificación de perjuicios morales; improcedencia del daño a la vida de relación, en favor de las víctimas de rebote; culpa exclusiva de la víctima; culpa de un tercero no identificado; cosa juzgada; reducción de los valores reconocidos por el SOAT y Aseguradoras; y, culpa única del propietario del camión. Además, objetó el juramento estimatorio (fls. 144 a 163, cuaderno principal, expediente físico).

3.- LOS LLAMAMIENTOS EN GARANTÍA.

3.1.- Mototransportar S.A.S. llamó en garantía a Oscar Antonio Mejía Ortiz, en calidad de propietario del vehículo de placas TRB 279, mientras éste, a su vez, vinculó a La Previsora S.A., Compañía de Seguros, en esta ocasión con fundamento en la póliza de seguro número 3004208, vigente entre el 23 de junio de 2012 y el 23 de junio de 2013.

3.2.- El señor Mejía Ortiz, una vez notificado del auto admisorio del llamamiento, se pronunció en forma similar al encausado, y planteó las defensas de hecho exclusivo de un tercero; culpa de la víctima; neutralización de presunciones; excesiva cuantificación del perjuicio patrimonial y del extrapatrimonial; reducción de la suma reconocida por el SOAT o la Aseguradora, y objetó el juramento estimatorio.

Y con relación al llamamiento propuso las excepciones de nulidad absoluta de la cláusula 4, literal D, del contrato de afiliación, y responsabilidad solidaria entre llamante y llamado en garantía (fls. 24 a 41, cuaderno 4, expediente físico).

3.3.- Por su parte, la Aseguradora desconoció los hechos de la demanda, pero se opuso a un resultado positivo de las peticiones arguyendo las defensas de hecho exclusivo de un tercero o de la víctima; neutralización de presunciones; improcedencia de la indemnización reclamada por las víctimas indirectas; reducción de la indemnización; tasación excesiva del perjuicio, fuera de que objetó el juramento estimatorio.

En punto al llamamiento, aceptó la existencia y vigencia del seguro, y adujo que la acción en contra de la Aseguradora había prescrito; que se debían acatar las cláusulas del contrato de seguro; límite del valor asegurado, y deducible pactado (fls. 64 a 79, cuaderno 5, expediente físico).

4.- LA SENTENCIA APELADA.

4.1.- El Juzgado negó la totalidad de pretensiones con cimiento en que Mototransportar S.A.S. no tenía afiliado el vehículo tipo tracto camión, de placas TRB 279, para el momento del accidente.

4.2.- Para arribar a esa conclusión, el Despacho de primer grado, en suma, consideró:

“El Despacho es consciente de la inexistencia de una afiliación para el momento de los hechos, considerando que las partes, Mototransportar y Oscar Antonio Mejía pactaron la inviabilidad de la prórroga automática y, además, la empresa expuso los manifiestos de carga para dicha fecha, sin que se constate un manifiesto de carga respecto del automotor vinculado con el accidente. Además, no se aportó prueba testimonial de la parte actora, que diera cuenta fidedigna de la guarda, por parte de la empresa de transportes, tampoco obra prueba de confesión, toda vez que el representante legal de la empresa demandada en ningún momento confesó tener la guarda material del vehículo para el momento de los hechos. El representante legal si manifestó que para ese momento el vehículo se encontraba registrado en el certificado de tránsito, pero no aseveró ni dio explicaciones suficientes sobre la carencia de guarda material.

Frente a este panorama probatorio, no resultaba plausible esgrimir por la parte actora, como defensa, la inoponibilidad de la terminación del contrato de afiliación en tanto que dicha figura, esto es, oponibilidad e inoponibilidad, se refiere a los efectos o no que tendrán los actos jurídicos frente a terceros, pero en un caso como el que ocupa la atención del Juzgado, referente a la acreditación de una guarda material no puede exonerarse el actor de su demostración. Esto, en tanto que la guarda material no es un asunto de simple registro o de connotación exclusivamente formal; la guarda material es una detentación, un aspecto fáctico, de hecho, que se tiene sobre un bien, es el poder sobre la cosa para dirigirla, detentarla, administrarla, aprovecharse de ella y beneficiarse de ella, situación que dentro del plenario no está probada.” (min. 26:49 a 29:09. Archivo sentencia II, CD adjunto)

5.- LA APELACIÓN.

5.1.- Los demandantes apelaron la decisión porque en el plenario hay prueba de que el citado vehículo estaba afiliado a Mototransportar S.A.S., no sólo por lo que reza su historial del tránsito, sino, además, por la versión del representante legal de la encausada.

A tono con lo anterior, señaló que la inscripción de la afiliación se mantenía para celebrar contratos con entidades públicas, de manera que para estos asuntos el vehículo estaba afiliado y, para efectos de la responsabilidad no lo estaba, por lo que se refirió a un timo.

III. CONSIDERACIONES.

1.- PRESUPUESTOS PROCESALES. Revisada la actuación cumplida no se observa impedimento alguno para proferir sentencia de mérito, pues la demanda reúne los requisitos legales, su trámite se ha cumplido con sujeción al rito

del proceso verbal, ante juez competente, y están demostradas la capacidad para ser parte, para comparecer al plenario, así como el interés para obrar, tanto por activa como por pasiva. Además, no se advierte configurado algún vicio que afecte la validez del trámite, ni motivo para que el Tribunal se abstenga de resolver.

2.- MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE LOS CARGOS. De cara al sistema de pretensión impugnativa, aplicable en materia de apelación de sentencias, en los términos de los artículos 322 y 328 del Código General del Proceso, se concentrará la Sala en definir quién, desde el punto de vista teórico, resulta ser el responsable de daños causados en medio del ejercicio de una actividad peligrosa y, desde luego, si en este caso se puede tener como responsable a la sociedad demandada.

Si se comparte la visión del a quo, simplemente se confirmará la sentencia apelada y, en caso contrario, se procederá a examinar si dicha empresa es responsable o si aplica algún eximente, como la culpa exclusiva de la víctima o el hecho único de un tercero, que fueron alegados. Además, sólo en el caso de una eventual responsabilidad de la encausada, se verificarán los demás presupuestos estructurales, para arribar a una sentencia condenatoria.

3.- RESPONSABILIDAD POR EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES PELIGROSAS. / RESPONSABLE. Diferentes tesis se han elaborado en cuanto a la persona llamada a responder por los daños ocasionados en medio del ejercicio de una actividad peligrosa. Una de ellas radica la obligación indemnizatoria en cabeza del propietario de la cosa utilizada en la acción riesgosa; otra, que se fundamenta en Código Civil francés, sostiene que es el custodio o guardián de dicho objeto, esto es, quien tiene su control y dirección, el que debe resarcir tales perjuicios.

Ahora bien, la teoría de la guarda, a su vez, ha presentado diversas posturas, entre quienes sostienen que la calidad de guardián debe ser precedida de un título jurídico, los que alegan que basta la dirección y control de la cosa empleada en la actividad peligrosa, y los que distinguen al guardián de la estructura o fabricante del bien y el guardián del comportamiento o ejecutor del riesgo.

Con todo, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que en el dueño se presume la guardia de las cosas, porque si bien *«no es cierto que el carácter de*

propietario implique necesaria e ineludiblemente el de guardián; (...) sí lo hace presumir como simple atributo del dominio, mientras no se pruebe lo contrario», es decir, que «hubiese dejado de ser propietario, (...), ya de cualquiera otra forma» (Casaciones de 18 de mayo de 1972, G. J., t. CXLII, Pág.188, y 20 de junio de 2000, exp. 5617).

Así las cosas, la responsabilidad del dueño por el hecho de las cosas inanimadas proviene de la calidad de guardián que se le presume y que, desde luego, puede destruir *«si demuestra que transfirió a otra persona la tenencia de la cosa en virtud de un título jurídico, (...) o que fue despojado inculpablemente de la misma, como en el caso de haberle sido robada o hurtada»*. (sent. 18 de mayo de 1972, ya citada); luego, con asiento en ello es posible afirmar que se responde por ser el guardián, aunque se tenga coetáneamente el título de dominio o cualquier otro, dado que lo determinante es el control efectivo de la cosa o de la actividad.

Lo dicho en precedencia no se opone a que varios sujetos ejerzan la guardia, pues múltiples relaciones jurídicas implican compartir esa misma condición, amén del título que se les quiera dar y ello podrá irradiar en la responsabilidad extracontractual que emerge del ejercicio, pues la solidaridad se abriría paso en la cuestión respectiva.

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC 08 abr. 2014, exp.: 2009 00743, expuso:

«La tesis del guardián de la cosa así expuesta y acogida en Colombia, descarta, por lo demás, dos ideas, 'la primera es que el responsable del perjuicio causado sea necesaria y exclusivamente el mero detentador físico de la cosa empleada para desplegar la actividad riesgosa [y] la segunda...es que la responsabilidad en estudio tenga que estar ligada, de alguna forma, a la titularidad de un derecho sobre la cosa' (Sala de Casación Civil, sentencia de 4 de junio de 1992, exp. 3382).

[...] Así mismo, el concepto de guardián no repele la eventual existencia de una 'guarda compartida', de poderseles imputar a varios sujetos la responsabilidad en la realización del daño, producto de una actividad riesgosa, porque de una u otra forma ejercen, todos ellos, control y dirección efectiva sobre la 'actividad'».

Y en cuanto a los presupuestos, que deben ser acreditados en el proceso, para que resulte exitosa la pretensión resarcitoria, memoró la Corte que es necesaria la prueba de la relación del sujeto demandado con la cosa usada en la actividad peligrosa, de suerte que se pueda concluir, sin ambages, que éste tenía el poder de dirección y mando del objeto y del ejercicio con él desplegado.

Ciertamente, en SC 4750 de 2018, exp.: 2011 00112-01, la Corte Suprema de Justicia fue contundente al señalar:

«De modo que a más de acreditar en el proceso el daño cierto, el factor de imputación (culpa, riesgo, etc. salvo que la ley lo presuma) y el nexo causal entre el daño y la conducta del agente, en esta responsabilidad por el hecho de las cosas deben estar también corroborados otros elementos: la relación del sujeto pretensamente responsable con la cosa de forma que se le pueda endilgar la calidad de guardián, y la actividad misma de esa cosa como causante directa o indirecta del perjuicio, actividad que si es peligrosa allana el camino para la aplicación del artículo 2356 de acuerdo con su decantada interpretación.»

4.- CASO CONCRETO. En el presente evento se observa que desde los anexos de la demanda se menciona a la sociedad Mototransportar S.A.S. como empresa afiliadora del vehículo de placas TRB 279. Repárese que en el informe del accidente se consignan los datos del conductor, del propietario y de la empresa; esta última a nombre de Mototransportar (fls. 21 y 22, cuaderno principal, expediente físico).

Igualmente, en el historial del vehículo se advierte que aparece la empresa Mototransportar como su afiliadora (fls. 66 y 119, cuaderno principal, expediente físico), circunstancia que se remonta al año 2005, cuando se presentó un cambio de empresa, según el documento visible a folio 164 del cuaderno principal.

Del mismo modo, se anexaron los contratos de afiliación del mencionado vehículo a Mototransportar S.A.S., desde 2005 y hasta 2013, aunque por periodos específicos que no abarcaban la anualidad respectiva (ver folios 166 a 179 y 274 a 277, cuaderno principal). Además, a tono con lo anterior, se ve como la señalada empresa, aduciendo ser la afiliadora del rodante, autorizó algunas cesiones de la afiliación (ver folio 179 y 191, cuaderno principal).

De estas pruebas se puede colegir que el tracto camión de placas TRB 279, vinculado al accidente que motivó este proceso, estuvo afiliado a Mototransportar S.A.S. y aunque ninguna de las fechas indicadas en los contratos coincide con la del suceso -3 de diciembre de 2012-, resultaría viable presumir que lo estaba, dado que hay contratos de afiliación desde 2005 y hasta 2013.

Tales circunstancias, además, harían conjeturar que, durante la vigencia de las afiliaciones, Mototransportar S.A.S. fungía como guardián de las actividades desplegadas con ese rodante, en manera similar a la suposición que brota para el propietario, con su sola inscripción en el registro automotriz.

Es cierto, como bien lo expuso el a quo, que la guarda es una circunstancia fáctica, de hecho, es un poder de mando y disposición que no se acredita con registros formales. El problema es que, según el Juzgado, al demandante le correspondía demostrar la guarda material del señalado rodante por parte de Mototransportar S.A.S., lo que no comparte la Sala; pues, al actor le basta con demostrar la calidad de empresa afiliadora, dado que de esa condición se deduce la guarda, razón por la cual, es al señalado guardián a quien compete evidenciar que no era el afiliador o que, en realidad, no tenía la guarda material del vehículo.

Por eso, en SC de 17 de mayo de 2011, expediente 25290-3103-001-2005-00345-01, la Corte Suprema de Justicia reiteró que en contra del propietario de la cosa con la cual se ejercita una actividad peligrosa hay una presunción de guardia, la que puede destruir el presunto guardián, lo que aplica igualmente para quien se beneficia de la actividad, como el propio dueño, pero, agrega la Sala, se puede extender a terceros, como la empresa afiliadora. En esa ocasión, memoró la Corte:

“El responsable por el hecho de las cosas inanimadas es su guardián, o sea quien tiene sobre ellas el poder de mando, dirección y control independientes. Y no es cierto que el carácter de propietario implique necesaria e ineludiblemente el de guardián, pero si lo hace presumir como simple atributo del dominio, mientras no se pruebe lo contrario. ...O sea, la responsabilidad del dueño por el hecho de las cosas inanimadas proviene de la calidad que de guardián de ellas presúmese tener. Y la presunción de guardián puede desvanecerla el propietario si demuestra que transfirió a otra persona la tenencia de la cosa en virtud de un título jurídico, como el de arrendamiento, el de comodato, etc., o que fue despojado inculpablemente de la misma, como en el caso de haberle sido robada o hurtada [...]la guarda jurídica de los vehículos con cuya operación se ocasionó el accidente corresponde a sus

propietarios, por ser ellos quienes tienen el uso, dirección y control de tales aparatos' (cas.civ. sentencias de 18 mayo de 1972, CXLII, p. 188 y 18 de mayo de 1976, CLII, 69), y particularmente respecto de daños causados en accidentes de tránsito, a 'quien recibe el provecho, explota o deriva beneficio de la actividad, como indudablemente lo obtiene el dueño del vehículo' (cas. civ. sentencia de 23 de septiembre de 1976, CLII, 420)." (Subrayas intencionales).

Luego, lo apropiado no era exigirles a los actores la prueba de la guardia que presuntamente tenía Mototransportar S.A.S., sino que era a la empresa a quien le correspondía desvirtuar esa presunción, por ejemplo, acreditando que la afiliación había terminado, que era otra compañía la afiliadora, o que la conducción que derivó en el accidente no la vinculaba, porque su guarda era restringida, por ejemplo, a cierto tipo de contratos o actividades.

Pues bien, corresponde a la Sala determinar sí, en este preciso evento, hay evidencias en cuya virtud se pueda desvanecer la guarda presunta ya advertida.

Dados a esa terea, se encuentra que en los contratos de vinculación siempre se pactó lo siguiente: *"No existe responsabilidad solidaria, cuando la empresa no interviene directamente en la celebración del contrato específico de transporte. Por ello, las partes acuerdan que se dará aplicación estricta a lo dispuesto en el artículo 991 del Código de Comercio. Como el PROPIETARIO es el que tiene el exclusivo uso, goce, disposición y administración del vehículo, él solo asumirá la responsabilidad que se derive de su administración"* (ver folios 166, 168, 170, 172, 174, 178, y 274, cuaderno principal).

O sea, más allá de la afiliación, Mototransportar S.A.S. únicamente respondía, solidariamente con el dueño, si el vehículo se encontraba desarrollando un contrato de transporte que vinculara a la empresa; por manera que era indispensable verificar si el día 3 de diciembre de 2012, el tracto camión de placas TRB 279 se encontraba ejecutando un contrato de transporte, a nombre de Mototransportar S.A.S.

Para ello resulta necesario verificar los manifiestos de carga, aportados por las partes y visibles a folios 202 a 207 del cuaderno principal, cuya revisión arroja que para esa fecha dicho vehículo no se encontraba desarrollando un contrato de

transporte, a nombre de Mototransportar S.A.S., en tanto, eran otros rodantes, los que, para esa data, ejecutaban convenciones asumidas por ésta.

En esa medida, aunque es posible presumir que, para el 3 de diciembre de 2012, el vehículo de placas TRB 279 se encontraba afiliado a la empresa Mototransportar S.A.S. y, por ende, que ejercía la guarda, al final del día esta última conclusión se desvirtuó, en los términos del contrato de afiliación, y toda vez que, al momento del suceso, ese coche no ejecutaba un contrato de transporte a nombre de la accionada.

Ahora bien, el representante legal de Mototransportar S.A.S. señaló en la audiencia que *“para el día de los hechos ellos (las entidades de seguridad, monitoreo y control) reportan un accidente con el vehículo. ¿Cuál es el procedimiento que se realiza? El controlador de tráfico inmediatamente busca en el sistema si el vehículo ha sido despachado por Mototransportar, porque dentro del informe, ellos (las autoridades de tránsito) dicen si va cargado o no va cargado, en ese momento hablan de una perfilería, ¿qué es lo que se hace? Inmediatamente se meten a la base de datos y verifican los manifiestos de carga nuestros, que es una manera de vinculación temporal para todas las compañías de transporte y nosotros no expedimos manifiesto de carga, o sea el vehículo no iba con nosotros”* (min. 58:04, audiencia inicial).

Efectivamente, después de validar si había algún contrato de afiliación a la empresa, el representante legal dice que lo hubo del 29 de junio de 2010 al 01 de septiembre de 2012 y agregó que el camión involucrado en este proceso, *“para el momento del accidente, no tenía ningún vínculo contractual con nosotros”* (min. 57:39).

Como se puede observar, el declarante mencionado en ningún momento confesó que Mototransportar S.A.S. fuera el guardián de algún transporte ejecutado con el señalado rodante; al contrario, esgrimió que no había manifiesto de carga y, por lo tanto, fue claro al decir que ese *“vehículo no iba con nosotros”*. Si bien, es cierto, aceptó la existencia de la anotación en el registro automotriz, consistente en que Mototransportar S.A.S. era la empresa afiliadora, aduce que eso es un problema de normas, pero que, en realidad, esas convenciones terminaron en septiembre de 2012 y hubo otra para 2013, pero sin que el camión estuviera vinculado a la empresa el día de los hechos; es más, aseveró que las empresas de

transporte son solidariamente responsables si expiden manifiesto de carga, lo que no ocurrió en este caso (min. 1:01:04).

De otro lado, expuso que únicamente el dueño puede solicitarle a las Oficinas de Tránsito la des-anotación de la empresa afiliadora (min. 1:03:17), y frente a las cuotas pagadas anotó que lo importante es la disponibilidad automotriz, que aplica cuando se necesita un transporte y se conoce que algún vehículo está en ese lugar (min. 1:03:03 y 1:04:20).

Entonces, de esta declaración no surge, como lo quiere hacer ver el censor, una prueba de la guardia en cabeza de Mototransportar S.A.S. Es más, la presunción aludida atrás se encuentra desvirtuada, por lo que no es posible arribar a una declaratoria de responsabilidad, como la pedida, ni a una sentencia condenatoria; y, finalmente, para la Sala, no es posible hablar de una maniobra fraudulenta, pues las anotaciones relacionadas con la propiedad y con la afiliación no determinan una indiscutible calidad de guardián.

En consecuencia, como se desmintió que Mototransportar S.A.S. era la guardiana de la actividad peligrosa desarrollada con el vehículo de placas TRB 279, en la fecha del accidente, era evidente su exoneración y, por consiguiente, la de los restantes llamados en garantía, dado que frente a ellos no se ejerció acción directa alguna.

IV. CONCLUSIÓN GENERAL.

A modo de colofón, aunque con diferencias en la motivación, en últimas es claro que la convocada no tenía la calidad de guardiana del vehículo, ni del transporte ejercido, y, siendo ello así, se impone la confirmación de la sentencia apelada, Por otra parte, se condenará en costas a los apelantes, incluyendo la suma de \$1.000.000 como agencias en derecho, siguiendo la preceptiva del canon 1.1. del Acuerdo 1887 de 2003.

V. DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL**, administrando

justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **CONFIRMA** la sentencia apelada, de fecha, procedencia y contenido ya indicados. **COSTAS** en esta instancia a cargo del apelante; como agencias en derecho se fija la suma de \$1.000.000. Líquidense para la Secretaría del Juzgado, en forma concentrada.

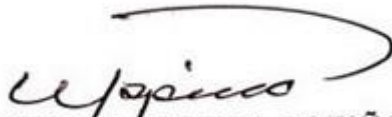
NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE



MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Magistrado

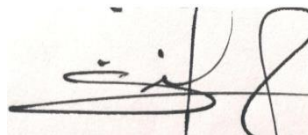
Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022



MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

Magistrada

Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Civil Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022



(Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022)

JOSE GILDARDO RAMIREZ GIRALDO

Magistrado